

- Polítoóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Investigadora Asistente del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.



Fotografía: Pendiente

se acabó la primera generación de neoparamilitares, ¿qué sigue?

Ganan “Los Urabeños”.

Luego de un proceso de investigación de doce meses, indagando las dinámicas criminales de las estructuras neoparamilitares en todo el país, se podría decir que en 2012 se acabó la primera generación de jefes del neoparamilitarismo, o como el Gobierno las denomina, Bandas Criminales (Bacrim). Estamos hoy ante el cierre de una nueva batalla —casi cíclica— entre

las casas matrices del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali: “Los Urabeños”, intrínsecamente ligados a la casa matriz antioqueña, por lo que su forma de ejercer violencia es territorial y profundamente violenta y “Los Rastrojos”, herederos del Cartel del Norte del Valle, interesados principalmente en el control económico de las rentas criminales. Hoy ganan “Los Urabeños”, pero “Los Rastrojos” no están definitivamente acabados.

“Los Urabeños” logran consolidarse como vencedores tras una larga disputa con “Los Rastrojos”, no sólo por el dominio del narcotráfico en el Pacífico, sino por el control territorial del país. Estos grupos han aumentado su presencia armada a 337

municipios en 2012, lo que evidencia el crecimiento de la violencia asociada a este fenómeno. En 2011 su presencia llegaba a 209 municipios.

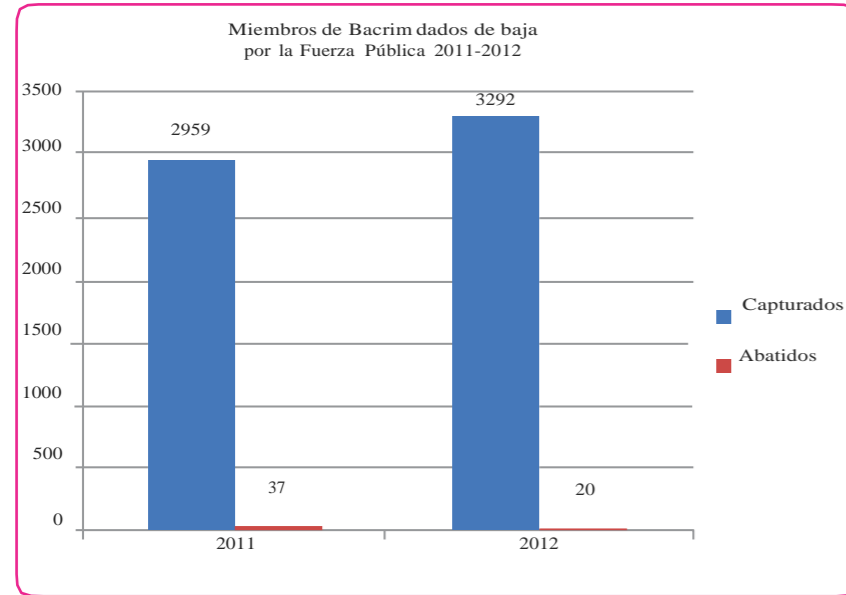
Aunque el actual gobierno de Juan Manuel Santos parecía avanzar hacia la identificación de las Bandas Criminales como la principal amenaza a la seguridad y en la definición de una estrategia para enfrentarlas, el sector de la defensa se ha quedado corto en comprender la magnitud del fenómeno y la interrelación de estos grupos con poderes políticos locales, construidos en el ejercicio de la violencia paramilitar. La política de seguridad se ha centrado en capturar o dar de baja a los llamados “objetivos de alto valor policial”, jefes visibles de estas bandas, al aumento del pie de fuerza en las regiones con altos índices en delitos de alto impacto, y en la reproducción del Plan Troya¹ en regiones como el nordeste antioqueño, Bajo Cauca y los departamentos de Magdalena y Chocó.

Según cifras del Ministerio de Defensa, a lo largo de 2012 aumentó el número de capturas a miembros de Bacrim. Este pasó de 2.959 en 2011 a 3.292 en 2012, lo cual, aunque es necesario, ha mostrado ser insuficiente para frenar la escalada de violencia relacionada con estos grupos neoparamilitares que han hecho gala de una enorme capacidad de recuperación frente a capturas y bajas producidas por enfrentamientos con la Fuerza Pública o con otros grupos armados ilegales, por la facilidad con que construyen y modifican las alianzas estratégicas que establecen y por los medios y procedimientos ágiles con los que reemplazan a sus bajas.

El siguiente gráfico muestra un comparativo de los resultados operacionales de la Fuerza Pública contra las Bacrim entre enero y septiembre de 2011 y enero y septiembre de 2012 en términos de capturas y abatidos. De 2011 a 2012 aumentó en aproximadamente un 13% el número de capturas sin que esto haya significado una reducción en la capacidad de estas bandas, ya que la magnitud de control territorial de los neoparamilitares ha aumentado.

¹ Los planes Troya son desarrollados por el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de la Policía con el Ministerio de Defensa. Tienen como punta de lanza la judicialización de los integrantes de las BACRIM por medio del fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal, las instituciones judiciales y el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional en las regiones. Generalmente, son respuestas a hechos de alteración del orden público. Entre 2011 y 2012, se lanzaron los planes Troya Pacífico, Troya III en el sur de Chocó y norte del Valle, Troya Nordeste en Antioquia, Troya II en Córdoba, Troya Tayrona en Magdalena, etcétera.

Gráfico 1. Bajos en las Bacrim por acciones de la Fuerza Pública



Fuente: Gráfico del Observatorio del Conflicto Armado hecho con datos del Ministerio de Defensa Nacional.

La reducción del número de 33 bandas criminales identificadas en 2006, a dos grandes bandas consolidadas –“Los Rastrojos” y “Los Urabeños”– en 2012, es presentada por el Gobierno como un éxito de su política de seguridad². Esto muestra una incomprensión del fenómeno neoparamilitar, ya que esta reducción, más que una disminución de efectivos y un desalojo de territorios, ha implicado una mayor reagrupación, absorción y cooptación entre este tipo de organizaciones criminales. Estructuras como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños” han cooptado bandas más pequeñas y han consolidado a estos dos grandes grupos a nivel territorial. La presencia de los “neoparas” había tendido a mantenerse en los 20 departamentos donde hacían presencia en 2006, pero en 2012 su presencia aumentó extendiéndose a 28 departamentos.

Adicionalmente, el buen clima generado en las organizaciones sociales y de víctimas por el reconocimiento del gobierno de Santos de la existencia de un conflicto armado interno, y por el apoyo e impulso a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha contrastado con la acepción del término Bacrim, que no abarca la relación de estos nuevos grupos con el fenómeno del paramilitarismo, reduciéndolos a simples organizaciones narcotraficantes. A lo largo

de este texto, se expondrán acciones que dan cuenta de la complejidad de los modos de operación y organización de estas bandas criminales, la compleja naturaleza de estas, y la necesidad de precisar un término diferente a Bacrim, que englobe la magnitud del fenómeno que han generado.

De seguir combatiendo a las Bacrim como hasta ahora, se prevé una dispersión y persistencia de estos grupos armados ilegales, que participan en economías criminales de distinto tipo, pero que tienen a su disposición armas largas, granadas y armamento pesado para exacerbar la violencia en las regiones y afectar humanitaria y socialmente a la población civil.

Modos de operación y nuevas formas de organización.

La forma de operar de estos grupos neoparamilitares guarda alguna relación con la de las antiguas organizaciones paramilitares. Como sus antecesores, los “neoparas” están por fuera de la estructura formal del Estado, pero conservan la anuencia de algunos sectores políticos regionales, de miembros de la Fuerza Pública y de algunas instituciones judiciales. Ejercen poder violento para defender el control de economías criminales heredadas de los paramilitares y emergentes y para mantener el *statu quo* de los proyectos políticos regionales contruidos a través de la violencia paramilitar. Esto último, no por un fin político en sí mismo, sino por la garantía de un control territorial que les permite la extracción de rentas ilegales y legales.

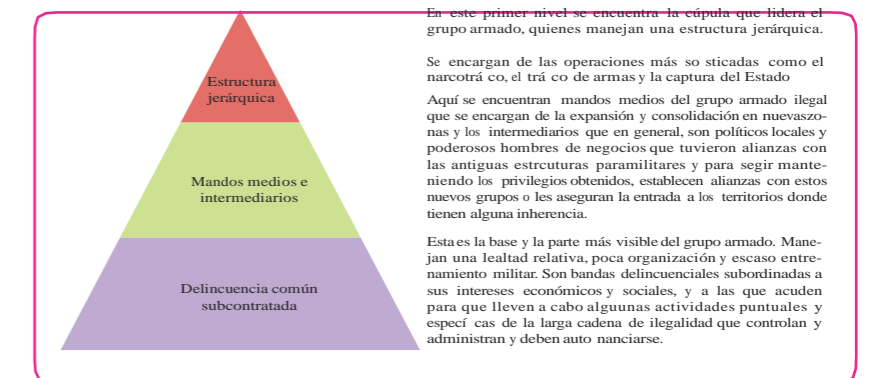
Sin embargo, estos nuevos grupos tienen particularidades en los modos de accionar en los territorios. De una zona a otra actúan con altos grados de descentralización. En las zonas urbanas establecen un control territorial indirecto a través de la subcontratación de delincuencia común, pequeños ejércitos privados y pandillas barriales. Así, en algunos sitios actúan como un *holding empresarial* donde a bandas delincuenciales y a poderosos grupos locales se les vende la “franquicia” de la Bacrim, beneficiándose ambos con

la transacción: las Bacrim logran mayor consolidación territorial a través de un control indirecto en las urbes, delegan “tareas operativas” de sicariato, microtráfico, inteligencia, préstamo de usura, microextorsiones, limpieza social y control social de la población. Asimismo las bandas delincuenciales se fortalecen y autofinancian con facilidad y, los grupos locales aseguran continuar con los beneficios obtenidos durante la época paramilitar.

Por su parte, en las zonas rurales la bandas criminales actúan con alto control social sobre la población civil, establecen alianzas estratégicas con grupos rivales para la utilización de rutas para el tráfico de armas, contrabando y drogas ilícitas; evitan el combate abierto con otras estructuras similares, por lo que optan por los asesinatos selectivos y las operaciones tipo comando. Esto contrasta con la disputa en los cascos urbanos por el control de las rentas ilegales y los circuitos de abastecimiento de armas y estupefacientes.

Esta forma de operar implicó un modelo de organización híbrido, en el que la cúpula de mando conserva una jerarquía vertical, pero la base operativa es profundamente descentralizada y actúa con grandes niveles de autonomía. Las bandas criminales absorben o se alían con estructuras criminales ya formadas, por tanto, en el pie de fuerza y el armamento no conservan una uniformidad³ y las acciones operativas varían de cascos urbanos a zonas rurales. Este es el caso organizativo de “Los Rastrojos”, “Renacer” y “Los Urabeños” desde 2009 hasta 2011:

Gráfico 2. Jerarquía organizacional de los grupos neoparamilitares 2009-2011



Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

² “En 2006 las bandas criminales eran 33, actualmente son 7, algunas de ellas con un muy pequeño número de integrantes. Con la nueva estrategia contra las BACRIM nos proponemos que en 2014 tales estructuras no existan”. Informe Consolidado Sector Central Ministerio De Defensa Nacional, Colombia. Septiembre, 2011.

³ RESTREPO, Jorge A. y APONTE, David. (Ed.). (2009). Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Entre 2011 y 2012, se dieron cambios importantes en el modelo de organización de las Bacrim producto de la muerte o captura de los jefes visibles de estos grupos armados. El 2012 significó el fin de la primera generación de los grupos neoparamilitares y la transformación de la violencia asociada a estos grupos, con ello, las formas organizativas fueron perdiendo la verticalidad en la estructura jerárquica de la cúpula, lo que produjo un proceso de descentralización de las estructuras armadas que ahora adoptan modelos operativos en red, donde no hay uniformidad en las acciones, ni una línea de mando, sino unos nodos de acción que utilizan un mismo nombre.

Fin de la primera generación del neoparamilitarismo.

La estrategia policial utilizada en la lucha contra las Bacrim, que privilegia la persecución y judicialización de las cabezas visibles de estas estructuras armadas, ha tenido un éxito en cuanto a las capturas y muertes de la mayoría de jefes militares de estas organizaciones. Desde 2010 hasta hoy, se logró dar de baja a “Cuchillo” y a “Giovanny”, uno de los hermanos Úsuga; la captura de “El Loco Barrera”; la entrega de los hermanos “Comba” a la justicia norteamericana; la captura de “Diego Rastrojo” y “Valenciano” en Venezuela; la de “Sebastián” en Antioquia y la de “Mi Sangre” en Argentina. Aun así, estos golpes no han tenido impactos duraderos en la desarticulación de estos grupos armados debido a dos razones:

1. No se ha develado quienes son los verdaderos jefes de estos grupos neoparamilitares. Se ha capturado a los jefes visibles, al estereotipado “traqueto”, pero, al igual que los paramilitares, dentro de estos grupos confluyen intereses de narcotraficantes, miembros de élites económicas y políticas, profesionales de alto nivel. Hasta que no se conozca a los verdaderos líderes de estas estructuras y su relación con la institucionalidad, el desmonte de la violencia asociada a este fenómeno será incierto.
2. La estrategia policial ha fragmentado y atomizado el fenómeno neoparamilitar en estructuras y bandas más pequeñas, sin que esto signifique una reducción de la capacidad militar y de la letalidad de sus acciones contra la población civil. Por el contrario, ha descentralizado y democratizado las economías ilegales y el poder violento de estos grupos en más sectores. En consecuencia, este fenómeno en lo urbano, se interrelaciona con una delincuencia común fortalecida por mayores flujos de dinero, capacidad de renovación de material bélico y procesos de reclutamiento acelerado, asegurando un control territorial indirecto en las ciudades que haga difuso el accionar militar de los grupos neoparamilitares. Es decir, el accionar de los antiguos paramilitares no estaba estrechamente ligado a la delincuencia común. Hoy, las Bacrim han subcontratado los servicios de este sector para aumentar su capacidad operativa en las ciudades.

El efecto inicial de esta estrategia fue la reducción progresiva del número de bandas: de 33 identificadas por la Policía Nacional en 2006, a 21 en 2007; a 23 en 2008; a 16 en 2009; y a sólo 6 en 2011. Sin embargo, las que quedaron se fortalecieron y ampliaron su dominio territorial por la absorción de las estructuras armadas debilitadas: “Los Paisas” fueron absorbidos en su mayoría por “Los Rastrojos”; hombres de la “Banda de la Alta Guajira” sirvieron para fortalecer a “Los Urabeños” en esta región; “Renacer” y “Los Machos” fueron

subcontratadas; la primera en un principio por “Los Rastrojos” y hoy trabaja para “Los Urabeños”; y la segunda fue clave en la entrada y consolidación de “Los Urabeños” en el Pacífico.

A inicios de 2012, las dos grandes organizaciones fortalecidas eran “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”, quienes ostentaban un dominio en sus zonas de control que se habían repartido a fines de 2011. El ERPAC comenzó 2012 dividido en “Bloque Meta” y “Libertadores del Vichada”, lo que, en parte, debilitó su capacidad de ampliar sus zonas de control a los departamentos de Guaviare, Casanare y Guainía.

En diciembre de 2011 fueron sometidos a la justicia 270 hombres del ERPAC. En esa ocasión se revelaron las deficiencias en la judicialización de estos grupos armados ilegales y la falta de una política gubernamental clara frente a las Bacrim: la Fiscalía solo tenía evidencia para emitir órdenes de captura a 19 de sus integrantes; los cargos por los cuales se les judicializó son, en su mayoría, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Los delitos relacionados con violación de Derechos Humanos y afectación a la población civil quedaron en su mayoría impunes. Tampoco se tenía clara la verdadera incidencia de los jefes de las bandas. En este caso, “Caracho” asumió el control del ERPAC, luego de la muerte de “Cuchillo”, pero no tenía la

Fotografía: Pendiente



capacidad para controlar el total de los combatientes y del territorio, fue perdiendo el apoyo económico de “El Loco Barrera” y decidió someterse, junto con algunos de sus hombres, a la justicia para lograr rebajas en su pena y previo acuerdo con otro grupo armado de cederles el control de zonas en el Meta, Guaviare y Vichada⁴. En general, el comandante de zona determina en parte el tipo de relación que se establece con la población civil y las lógicas de acción del grupo armado ilegal en el territorio.

Los miembros del ERPAC que no se entregaron, se dividieron en el “Bloque Meta” y “Los Libertadores de Vichada”. Hoy, estos dos grupos después de una disputa por las zonas rurales de San Martín, Granada y los límites entre Meta y Vichada, tienen un acuerdo de reparto territorial en el que el Bloque Meta, fortalecido con el apoyo de Daniel “El Loco Barrera”, recientemente capturado, controla la región del Ariari y Mapiripán; y “Los Libertadores de Vichada”, quienes se unieron a “Los Urabeños”, manejan Vichada⁵.

La caída de los jefes visibles de “Los Rastrojos” debilitó el control que esta banda ejercía sobre las franquicias locales dejadas en manos de la

⁴ *El Tiempo*. “Los dilemas que hay detrás del sometimiento de la banda ERPAC”. Diciembre 23, 2011.

⁵ *El Tiempo*. “Jefes del ERPAC se dividieron el poder en los Llanos”. Septiembre 17, 2012.

delincuencia común, grupos locales y pandillas. La entrega de los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos –DEA– y la captura en Venezuela de Diego Pérez Henao, “Diego Rastrojo”, durante 2012, produjo un fenómeno de atomización de las estructuras locales y los mandos medios de la organización, por lo cual empezaron a disputarse el control de algunas zonas. Lo que en 2011 era un grupo armado consolidado y en busca de expansión, se dividió en estructuras locales con grados altos de desarticulación que se disputan entre ellas, o con grupos rivales. Por ejemplo, en la región del Bajo Cauca antioqueño existen los “Héroes del Nordeste” y los “Renacentistas”, quienes mantienen fuertes enfrentamientos por el control de la minería ilegal; en Nariño, la población civil ha identificado al menos tres grupos relacionados con la casa “Rastrojos”: “Rocas del Sur” o “Rondas Campesinas”, “Nuevos Rastrojos”, y la reaparición de “Nueva Generación”; en el Pacífico, “La Empresa” que antes seguía órdenes de los hermanos “Comba”, ahora está aliada con “Los Urabeños” para debilitar lo que queda de “Los Rastrojos” en la región.

Fotografía: Pendiente



Esta fragmentación y atomización de las Bacrim, mostró, más que la desarticulación de estas estructuras armadas, que la estrategia policial es exitosa en cambiar y reorganizar el fenómeno neoparamilitar. Lo que genera ciclos de alta violencia letal como lo muestran las recientes masacres en Santa Rosa de Osos, Buenaventura, Envigado y Tierralta.

¿por qué ganaron “Los Urabeños”?

El debilitamiento de “Los Rastrojos” convirtió a “Los Urabeños” en la gran Bacrim del país. “Los Urabeños” luego del paro armado que convocaron a principios de 2012⁶ en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar, revelaron su capacidad operativa como grupo armado ilegal y el alto control social que tenían en estas zonas, inició la estrategia de expansión hacia circuitos claves de las rentas ilegales como el Pacífico, las zonas de frontera, los Llanos Orientales y el Bajo Cauca antioqueño.

Desde sus inicios, “Los Urabeños” tuvieron jefaturas y estructuras armadas compuestas principalmente por ex paramilitares de las AUC, lo que les garantizó hombres preparados

⁶ Revista *Semana*. “Los ‘Urabeños’ muestran su poder regional”. Enero 6, 2012.

militarmente y con un cúmulo de capacidad intimidatoria heredada de sus antecesores. Si bien “Los Rastrojos” también contaban dentro de sus integrantes con miembros de los antiguos paramilitares, su origen estaba asociado fundamentalmente a narcotraficantes sin mayor grado de entrenamiento militar.

Además, pese a la muerte y captura de varios de los jefes de “Los Urabeños”, estos mantuvieron una organización híbrida que conservaba una cadena de mando en la cúpula y una jerarquía organizacional en la que jefes y subalternos tenían relaciones de retroalimentación tipo red. Mostrando así una enorme capacidad de recuperación frente a capturas de la Fuerza Pública y bajas producidas por enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, por la facilidad con que construyen y modifican las alianzas estratégicas que establecen, y por los medios y procedimientos ágiles con los que reemplazan a sus bajas. Mientras en las zonas rurales dejaron encargados a selectos grupos de hombres altamente entrenados para la expansión territorial; en las ciudades subcontrataron bandas delincuenciales de bajo nivel con relativa autonomía

frente a la cadena de mando.

Los aspectos más contundentes del éxito de “Los Urabeños” son: 1. La estrecha relación con algunos miembros de la Fuerza Pública, particularmente

con integrantes de alto nivel del Ejército; 2. La vinculación de poderes políticos regionales que otrora emergieron o se fortalecieron con los órdenes sociales autoritarios establecidos por el paramilitarismo.

El apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública ha estado asociado a dos tipos de corrupción: la administrativa, en donde hay conductas ilícitas en la gestión de recursos humanos y materiales en el interior de la institución tales como pago de comisiones por contratos internos, desvío de fondos, pago por ascensos o traslados; y la operativa, que ha tenido más peso en el fortalecimiento de “Los Urabeños”, al brindarles protección, poner a su disposición recursos de la institución para accionar y operar conjuntamente. “Los Urabeños” cuentan con la participación de algunos militares activos y retirados de la Fuerza Pública dentro de su grupo armado. Recientemente se dio a conocer por expedientes judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la DEA, que un coronel retirado de las Fuerza Militares conocido como “Mano Negra” es uno de los líderes dentro de la organización neoparamilitar:

(...) desde que comenzó a trabajar con la organización, puso sus propias condiciones. Entre ellas habría dejado en claro que no sería una especie de testaferro de “Los Urabeños”, sino que tendría que estar dentro del organigrama de la organización como uno de sus principales líderes, con una participación directa en el envío y tráfico de cargamentos de droga hacia el exterior y el manejo del microtráfico de estupefacientes en algunas regiones del país⁷.

Además, durante 2012, militares en servicio estuvieron relacionados con cadenas operativas de “Los Urabeños”. Fue detenido un mayor del Ejército con 79 kilos de marihuana cerca de Jamundí en el Valle del Cauca⁸, se detuvo a un teniente y cuatro soldados, en la vía entre Medellín y Turbo con por lo menos 600 kilos de cocaína⁹, y se capturó a seis soldados sindicados de transportar 25 kilos de marihuana en un avión militar que aterrizó en la base de Tolomaidá¹⁰. Desde sus antecesores, “Los Urabeños” habían logrado una relación de conveniencia con miembros de la Fuerza Pública,

⁷ *El Espectador*. “Militares capturados con droga harían parte de un cartel”. Febrero 4, 2012.

⁸ *El Espectador*. “Capturan a mayor del Ejército con 79 kilos de marihuana”. Diciembre 18, 2012.

⁹ *El Meridiano de Córdoba*. “Militares vendían coca a ‘Urabeños’”. Julio 5, 2012.

¹⁰ *Caracol Radio*. “A la cárcel 6 militares involucrados en el transporte de 25 kilos de marihuana”. Diciembre 19, 2012.

que ha sido difícil de depurar, en parte, porque el mecanismo para la invisibilización del problema ha sido los retiros, que dada la facultad discrecional no llegan a la justicia y quedan en la impunidad. Asimismo, la vinculación con sectores de la clase política y económica regional les ha asegurado convertirse en la organización neoparamilitar más poderosa de Colombia. Muchos de estos sectores temen perder los beneficios económicos y políticos logrados en la época paramilitar, por lo que le han asegurado la entrada a sus territorios y el desvío de recursos públicos para su financiamiento; en especial, les aterroriza entregar el botín de tierras despojadas por los paramilitares que están en sus manos o en las de testaferros.

Un caso que vale la pena mencionar es el de la región del norte del Cesar y La Guajira. El accionar de “Los Urabeños” en esta

región se relaciona de manera compleja con actividades ilícitas desarrolladas por grupos de poder del norte del Cesar que históricamente y de manera subterránea, se han configurado a partir de rentas de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y la captura de la contratación pública. En la disputa por las rentas ilegales con un sector de políticos locales de

La Guajira, alineados estratégicamente con “Los Rastrojos”, han dinamizado las lógicas de la violencia en la región¹¹. Esto revela que sectores políticos se alían con estos grupos “neoparas” para competir económicamente con otro grupo de poder, y que a diferencia de las alianzas con los viejos paramilitares no buscan la configuración de órdenes sociales y proyectos políticos a través de la violencia, sino defender los ya establecidos.

“Los Urabeños” son, entonces, una organización lo suficientemente consolidada en zonas donde históricamente hizo presencia el paramilitarismo y que heredaron también el apoyo de sectores de la legalidad que garantizan su supervivencia.

Acciones operativas y nuevas zonas de control territorial.

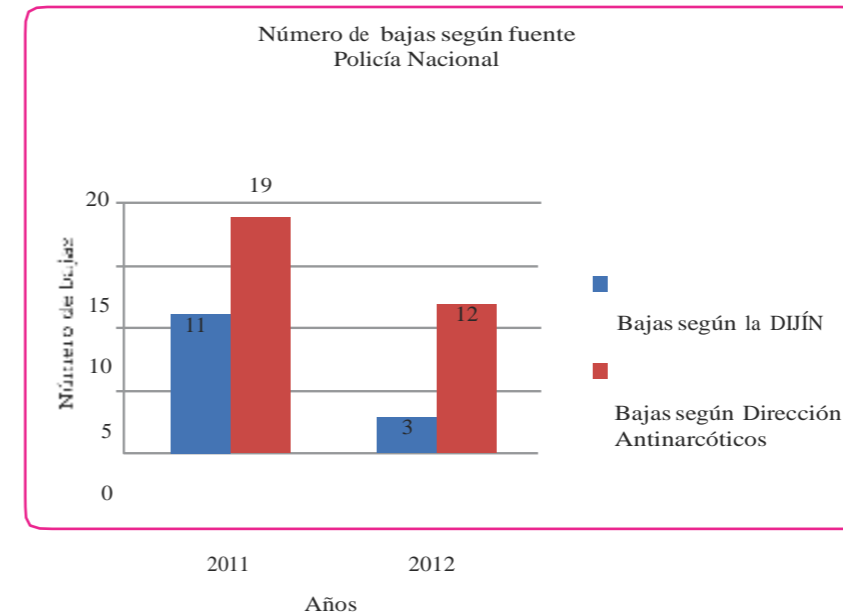
Al analizar las acciones realizadas por los grupos neoparamilitares es importante tener en cuenta que estos son grupos armados ilegales no contraestatales; por ello el objetivo de su accionar no son las fuerzas de seguridad del Estado.

El Gobierno mide las acciones de las Bacrim en forma equivocada. Privilegia los hechos realizados por la Fuerza Pública para dismantelar las bandas: capturas, bajas, incautaciones, destrucción de culti-

¹¹ Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y D.I.H., “Informe de Riesgo N°024-12 del Sistema de Alertas Tempranas – SAT”. Octubre 12, 2012.

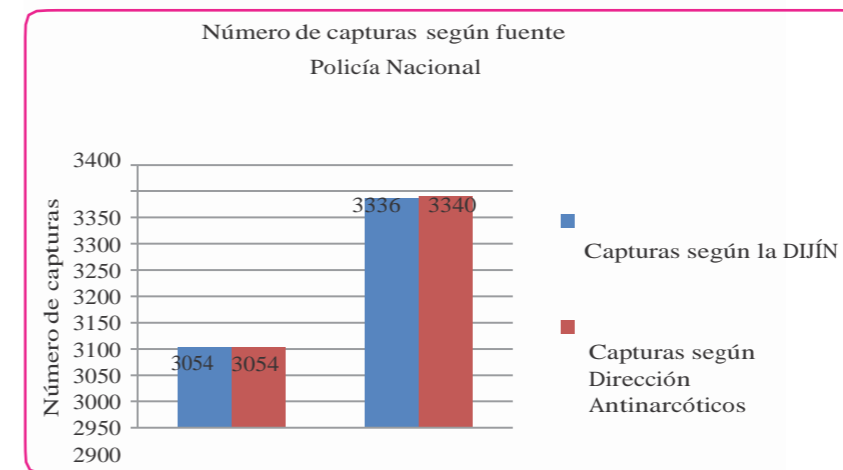
Las operaciones dirigidas a dismantelar el narcotráfico han demostrado que no son suficientes para acabar con las organizaciones neoparamilitares. Aparte de que no se mide el fenómeno neoparamilitar en toda su complejidad, las cifras de los resultados operativos de la Policía Nacional contra las Bacrim no coinciden:

Gráfico 3. Comparativo entre fuentes policiales



Fuente: Gráficos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) con información del Observatorio del Delito de la DIJIN y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Gráfico 4. Número de capturas según fuente Policía Nacional



vos ilícitos, dismantelamiento de laboratorios, entre otras; no mide el real impacto del fenómeno en la población civil, en la construcción de grupos de poder y en la configuración de nuevos ciclos de violencia.

Así, las cifras no coinciden por una diferencia pequeña; reflejan la falta de una política gubernamental seria frente a las Bacrim, al igual que la ausencia de una lectura y comprensión del fenómeno neoparamilitar en su dimensión tácticooperativa y en la social: en el sentido de la creación de órdenes sociales en zonas donde tradicionalmente el Estado no se ha consolidado, mediante el ascenso social y económico a través de la violencia armada.

Por otra parte, los neoparamilitares cometen acciones contra civiles: amenazas, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado,

extorsiones, violencia sexual, masacres y desplazamiento forzado; que si bien no son acciones bélicas en contra del Estado, retan la capacidad de este mismo para brindar protección a los ciudadanos. Además, revelan su capacidad de controlar socialmente a las poblaciones donde tienen influencia y de perpetuar el *statu quo* establecido por sus antecesores.

Referente a las acciones contra civiles, desde el 2008 la Corporación Nuevo Arco Iris venía utilizando las cifras de Acción Social sobre desplazamiento individual por actor armado para

2012

A
ñ
o
s

Fuente: Gráficos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado de la CNAI con información del Observatorio del Delito de la DIJIN y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

dar cuenta de la afectación de la población civil producto de la violencia asociada al neopara- militarismo, pero este año las cifras no están consolidadas. Tras el paso de Acción Social al Departamento para la Prosperidad

Social (DPS) en el gobierno de Juan Manuel Santos, el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) desapareció para establecer un sistema que integrara datos de la población desplazada con datos de otros tipos de víctimas definidas por la Ley 1448 de 2011, pero en 2012 no logró estructurarse. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, encargada del nuevo sistema reconoce que “(...) se presentan deficiencias con respecto a información actualizada de los datos de desplazamiento debido a cambios institucionales y estructurales, derivados de la nueva reglamentación emitida con base a la Ley de Víctimas¹²”

Pese a la ausencia de cifras oficiales, es importante resaltar que la forma de ejercer la violencia contra la población civil de estos grupos “neoparas” reproduce el modelo de los antiguos paramilitares: una violencia para eliminar al contrario¹³ y la utilización de métodos atroces para generar terror y obediencia.

Por otra parte, es claro que la territorialización de la violencia asociada al fenómeno neoparamilitar está relacionada con la concentración de economías informales e ilícitas como la minería del oro, la explotación maderera y el narcotráfico; también con economías legales que facilitan el lavado de activos como las empresas de apuestas y chance. La relación entre un grupo armado neoparamilitar y la población civil no se da sólo a través de la violencia. El control de empresas legales e ilegales es clave. El poder económico para satisfacer necesidades de subsistencia de la población le permite a estas organizaciones controlar grupos sociales que se benefician de su accionar.

Sin embargo, es clara la expansión territorial de estos grupos durante 2012:

¹² Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. “Informe de Rendición de Cuentas” [En línea] (Octubre, 2012). Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/images/do cs/Estados_Financieros/OCTUBRE.pdf

¹³ La violencia contra las mujeres, por ejemplo, está siendo utilizada como una estrategia de supresión del enemigo y de desarticulación de procesos organizativos, lo que afecta la exigibilidad de derechos fundamentales. Se han registrado casos en los que miembros de los grupos neoparamilitares atacan a las mujeres por sos-

tener relaciones afectivas con personas de grupos guerrilleros, se les castiga por incumplir normas de conducta que ellos establecen, se les obligan a cocinar y a proporcionarles alimentos, se les fuerza a tener relaciones sexuales y se les amenaza por defender sus derechos, por denunciar la presencia de estos actores en sus territorios o por reclamar la desaparición de familiares.

Cuadro 1. Municipios con actividades de grupos neoparamilitares según departamento 2011 y 2012:

Departamento	Número de municipios 2011	Número de municipios 2012
Antioquia	43	78
Arauca	0	3
Atlántico	5	9
Bolívar	10	21
Boyacá	2	1
Caldas	1	1
Casanare	1	8
Caquetá	1	0
Cauca	7	11
Cesar	12	19
Chocó	6	18
Córdoba	18	20
Cundinamarca	5	6
Guainía	0	1
Guaviare	1	3
Huila	4	1
La Guajira	7	7
Magdalena	5	15
Meta	7	15
Nariño	17	16
Norte de Santander	11	12
Putumayo	3	4
Quindío	1	3
Risaralda	2	2
San Andrés	1	2
Santander	16	13
Sucre	7	13
Tolima	2	4
Valle del Cauca	13	28
Vichada	1	3
TOTAL	209	337

El preocupante aumento de municipios con accionar de grupos neoparamilitares en Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar está relacionado con la expansión de “Los Urabeños” hacia territorios estratégicos para los circuitos económicos criminales, en particular la minería de oro. Por ejemplo en Antioquia, “Los Urabeños” han buscado ampliar su control territorial en los municipios con economías

informales de explotación de madera y oro, y municipios aledaños a carreteras que comunican con la costa Caribe y el golfo de Urabá. Arrancan en el Bajo Cauca, atraviesan el nordeste antioqueño, norte y occidente, y finalizan en Urabá, corredor que conecta a Bolívar,

Córdoba y Chocó. Según registros de la Gobernación de Antioquia, la producción de oro en este departamento durante 2012 fue cercana a las 24 toneladas, y está principalmente concentrada en el nordeste antioqueño, una región con altos índices de violencia por la disputa territorial entre las dos disidencias de “Los Rastrojos” –“Héroes del Nordeste” y “Renacentistas”– y “Los Urabeños” En cambio, la disputa en Medellín, principal centro urbano de la región, es por el control del microtráfico de estupefacientes y la extorsión. Además, es una ciudad estratégica para el lavado de activos.

Diversificación de las rentas criminales.

El narcotráfico no es sólo una de las principales fuentes de financiación de los grupos neoparamilitares, también es el eje de su accionar en varias regiones del país. Sin embargo, la fragmentación de los grandes carteles de la década de 1980 llevó a que la cadena productiva del narcotráfico no pudiese ser controlada por un solo actor y se dividiera en nodos: cultivo, producción, transporte, distribución y comercialización; y por supuesto, servicios de seguridad privada. En consecuencia, el negocio del narcotráfico se dividió entre el aparato empresarial y el aparato armado¹⁴.

¹⁴ ÁVILA MARTÍNEZ, Ariel F. Políticas Públicas en Seguridad Urbana y Convivencia en Bogotá (s.f.), 2012. Monografía. 20 p.

Por ende, hoy, estos grupos armados pueden llegar a alianzas estratégicas con las guerrillas para la venta de base de cocaína. En general, los grupos neoparamilitares, dependiendo de la zona, se encargan de cuidar cultivos ilícitos, tienen laboratorios de producción, controlan rutas de transporte y distribución, manejan la intermediación de la comercialización en mercados internacionales con grandes organizaciones del crimen organizado como los carteles mexicanos, y se encargan de la distribución de estupefacientes en los cascos urbanos.

Además del narcotráfico, estos grupos tienen intereses económicos en la minería del oro. El alza en la cotización del oro en los mercados internacionales ha ocasionado un auge de la explotación ilegal de este metal, que rápidamente fue vista por los paramilitares como una oportunidad para aumentar sus rentas. Desde 2004, el Bloque Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia en el sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, buscaron en la minería ilegal una nueva fuente de financiación. En la actualidad, los grupos “neoparas” se disputan esta economía ilegal que viene en crecimiento y que les posibilita grandes ganancias, un fácil lavado de activos y no tiene las consecuencias penales del narcotráfico. Los departamentos más afectados por la violencia asociada al control económico

de la explotación aurífera son Antioquia, Bolívar, Chocó y Valle del Cauca, que fueron los mismos en los que crecieron los municipios con registros de acciones de neoparamilitares.

La situación de este tipo de economía ilegal es compleja por cuanto en el país, el comprador oficial y monopólico de los productos mineros es el Gobierno. Este mercado comporta sacar el oro del país por medio del contrabando; venderlo en mercados negros internacionales y reinvertir el dinero en otros negocios para legalizarlo. Así, el lavado de activos es uno de los principales retos del Estado para enfrentar a las Bacrim.

Otro interés económico de estos grupos son las tierras despojadas por los paramilitares, que ahora están en manos de testaferros o de miembros de los nuevos grupos. He aquí, una de las grandes talanqueras del proceso de restitución de tierras apalancado por el gobierno Santos:

(...) el sustrato político y social que respaldó al fenómeno paramilitar nunca se afectó de manera irreversible y ahora asoma la cabeza, en entornos en los que nuevos y viejos grupos armados están dispuestos a proveer la “mano de obra” para atacar la restitución y en los que la institucionalidad local es débil para defenderla.¹⁵

Si bien estos son los tres grandes mercados criminales de los que se nutren estos grupos y en los que basan su control territorial en las zonas rurales, hay unos “pequeños” mercados en las ciudades que no sólo nutren sus finanzas, sino que han traído consigo la urbanización del conflicto armado y la difusión del mismo, es decir se tiende a creer que el accionar de estos grupos es un problema de crimen organizado y/o delincuencia común que nada tiene que ver con el conflicto armado, y con la continuidad del paramilitarismo como actor armado.

Estos mercados están asociados con la extorsión al menudeo, redes de prostitución, microtráfico y una amplia red de lavado de activos, que en las ciudades intermedias están relacionadas con empresas de apuestas y chance, tiendas de víveres y abarrotes y mototaxismo.

¿Qué nos espera?

Tal como están hoy las cosas tendremos un período de hegemonía de los llamados “Los Urabeños” en medio de violentas disputas con los grupos desprendidos de “Los Rastrojos” y con las tradicionales fuerzas de los Llanos Orientales; una mayor vinculación de todas estas organizaciones al crimen organizado transnacional, especialmente a los carteles mexicanos; un esfuerzo por diversificar los negocios con su vinculación creciente a la minería ilegal y al contrabando; una acentuación del trabajo en red para ocultar jefaturas nacionales y esquivar la acción policial y militar sobre sus líderes; la invención de nuevas formas de intervención en las campañas políticas para mantener los nexos con las élites locales; la participación soterrada en la resistencia de los grandes dueños de la tierra a la restitución, la reforma agraria y la paz. En estas condiciones, el gobierno del presidente Santos deberá retomar la inspiración inicial de que estas fuerzas se están constituyendo en el reto principal de seguridad y lo serán más si se firma un acuerdo de paz con las guerrillas y entramos de lleno en el post-conflicto; tendrá que reajustar la estrategia asumiendo que es un fenómeno complejo que ha heredado características de los viejos paramilitares, es decir, aceptar que estas organizaciones son un punto de encuentro entre criminales avezados, agentes del Estado, líderes políticos y empresarios y por tanto la acción sobre ellos va mucho más allá de la persecución policial y militar, es preciso una movilización social y política del país y una reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, orientada a darle herramientas que le permitan hacer diagnósticos de contexto regional y de estructuras para dar un salto en la investigación; es necesario igualmente acometer una depuración de la Fuerza Pública y un fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado.



¹⁵ *Semana*. “Restitución: el nuevo conflicto”. Feb. 23, 2012.